----En la ciudad de Trelew, a los días de septiembre del año dos mil dieciséis, se reúne la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia de la Dra. Natalia I. Spoturno y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: **“V., D. R. c/ A. S.A. A.R.T. s/ Accidente de trabajo” (Expte. N° 430 – Año 2016 CAT)**, venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Son justos los honorarios regulados a la letrada patrocinante y al apoderado del actor? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 183. ----------

----**A LA PRIMERA CUESTIÓN** el Dr. Velázquez dijo:----------

----I.- La sentencia de primera instancia condenó a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada al pago de la suma de $ 75.885,42 por las prestaciones dinerarias debidas por el infortunio laboral que sufriera el actor, calculadas según el art. 14 inc. 2 apdo. “a” de la Ley 24.557, con el ajuste por R.I.P.T.E. reglado en la Ley 26.773 -a consecuencia de no aplicar las normas reglamentarias aprobadas por Dec. 472/14-, con más los intereses devengados por dicho capital desde la mora de la aseguradora y a ser liquidados de acuerdo a la tasa empleada por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento.----------

----Ambas partes apelaron tal pronunciamiento, expresando a fs. 170/172 y 173/175 vta. los agravios que a continuación trataré. ----------

----II.- Su primera queja la dirigió la demandada apelante contra la inaplicación al caso de las normas reglamentarias aprobadas por el Dec. 472/14, que limitan el ajuste por R.I.P.T.E. a los “pisos” y sumas fijas previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.---------

----En muy numerosas ocasiones desde el año 2014 en este tribunal hemos resuelto que el ajuste por R.I.P.T.E. era de aplicación también a las prestaciones calculadas según las fórmulas del art. 14 de la Ley 24.577 y no únicamente a los mínimos y sumas fijas establecidas por ese ordenamiento, cual dispuso el art. 17 de la Reglamentación de la Ley 26.773 aprobada por Dec. 472/14 P.E.N., norma que declaramos inconstitucional por exceso reglamentario contrario al art. 99 inc. 2 Const. Nac.----------

----Tal es mi posición en el tópico, de la que como opinión personal no abdico pues responde a mis firmes convicciones. No obstante, debemos ahora adoptar la postura antitética en los pronunciamientos de este cuerpo, cual ya hiciéramos en la c. 226/16 S.D.L. 43/16 del pasado 27/6/16.----------

----Es que sobre el arduo tema se ha pronunciado la Corte Suprema Nacional en el caso “Espósito c/ Provincia A.R.T. S.A.” del 7/6/16 (CNT 18036/2011/1/RH1, ver en www.csjn.gov.ar), expresando claramente que el ajuste previsto en los arts. 8 y 17 inc. 6 de la Ley 26.773 se refiere en exclusiva a los importes de las prestaciones adicionales de suma fija incorporadas al régimen de riesgos del trabajo por el Dec. 1.278/00 y a los

pisos mínimos establecidos por el Dec. 1.694 y por el art. 3 de la ley citada (considerando 5° y 8° del aludido nuevo fallo). En la ocasión el Alto Cuerpo no objetó la constitucionalidad del decreto reglamentario, como bien pudo hacerlo de considerarlo pasible de ello aún de oficio, en tanto ese Máxime Tribunal tiene desde hace años sentado criterio acerca de esa facultad de proceder “ex officio” en el precedente “Banco Comercial de Finanzas S.A.”, del 19/8/04 (Fallos 327:3117), para ser reiterado con otra composición in re “Rodríguez Pereyra”, del 27/11/12 (Fallos 335:2333). Desde que la Corte Suprema Nacional es el intérprete final de la Constitución Nacional, hemos de reconocer primacía su criterio hermenéutico. ----------

----De otro lado, el inclinarnos por nuestra parte ante tal criterio del Alto Órgano Nacional nos lo impone el principio de economía procesal en sus tres vertientes de ahorro de tiempo, esfuerzos y gastos (art. 34, inc. 5, apdo. “e” C.P.C.C.), pues carecería de sentido forzar a las partes a recorrer ulteriores instancias a sabiendas del resultado final de la cuestión.----------Por tales motivos, a salvo mi personal opinión contraria -que mantengo inalterada-, hemos de declarar que en el caso no corresponde el reajuste del monto del capital de la condena según la variación del R.I.P.T.E. desde el día del hecho hasta del efectivo pago.----------

----Por tanto, si el resultado de la fórmula del art. 14 inc. 2 apdo. “a” de la Ley 24.557, con más el incremento adicional del art. 3 de la Ley 26.773, alcanzaba a $ 204.991,21 decisión esta que ha llegado firme a la alzada por ausencia de agravio al respecto-, descontado el pago parcial realizado por la demandada de $ 155.704,73, obtenemos que el remanente insoluto al que debe ascender el capital de la condena es de $ 49.286,48. ----------

----III.- De su lado, el actor formuló agravio contra el “dies a quo” de los intereses, establecido por el juzgador de la otra instancia a los treinta días de cumplirse un año del infortunio, sosteniendo por su parte que debe serlo el día del hecho por tratarse de una prestación reparadora de la incapacidad sufrida y ser de aplicación el precepto del art. 2 de la Ley 26.773. ----------

----

----Dada la típica naturaleza contractual del vínculo jurídico de la A.R.T. con el damnificado -la aseguradora no se subroga en la posición del empleador para mantener a éste indemne, sino que contrata prestaciones a favor de terceros-, no es aplicable a estos supuestos el criterio de la mora automática el mismo día del hecho que impera en el campo de la responsabilidad extracontractual, sino que en morosidad queda incursa la deudora con la exigibilidad de su obligación, dualidad en el régimen de la mora en las obligaciones convencionales y en las aquilianas conocida desde antiguo (confr.: Wayar, "Tratado de la mora", Ábaco 1981, pág.105).----------

----A ello no empece que el art. 2 de la Ley 26.773 determine que el derecho a la

reparación surge desde que acaeció el evento dañoso, porque conceptos distintos son el nacimiento de ese derecho y la exigibilidad de la obligación, esto es cuando el deber de prestación que pesa sobre el deudor, llegado el *tiempo del pago,* se torna *exigible* y el acreedor entonces actualiza sus poderes de agresión patrimonial, encontrándose facultado para reclamar compulsivamente su realización (confr.: Wayar, opus cit., pág. 273). En suma, es exigible la prestación cuando, llegado el tiempo del pago por agotamiento del plazo, adquiere el acreedor el poder actual de reclamar coercitivamente el cumplimiento (confr.: Valsecchi, "Sulla iliceitá del ritardo nell'adempimento", en "Studi in onore di Alberto Asquini", Padova 1935, V-2039).----------

----Es menester en la especie establecer entonces cuándo la prestación le fue exigible para determinar a partir de allí el momento en que tuvo lugar el incumplimiento imputable de la deudora. La mora de la demandada, de conformidad con el art. 2 de la Res. 414/99 S.R.T., tuvo lugar de pleno derecho tras los treinta días corridos transcurridos desde que la prestación debió ser cumplida, con lo cual la cuestión se traslada a establecer cuándo hubo de ser hecho dicho pago. Para que ello resultara exigible era imprescindible que la incapacidad parcial pasara de meramente temporal a la condición de permanente (art. 14 inc. 2 de la Ley 24.557), lo que tiene efecto de consolidación del daño (confr.: C.S.N., in re "Calderón c/ A. A.R.T. S.A. s/ accidente", 29/4/14, CSJ 915/2010 45-C,/ CS1, en www.csjn.gov.ar; C.N. Trab., Sala IV, 4/12/14, "Gamboa c/ La Caja A.R.T.", en elDial. com AL 4703 y sus extensas citas; esta sala, c. 646/15 S.D.L. 5/16, c. 656/15 S.D.L. 7/16, c. 51/16 S.D.L. 18/16, c. 177/16 S.D.L. 38/16, c. 319/16 S.D.L. 60/16). ----------Sin embargo, y con mayor precisión, corresponde señalar que en pura lógica es necesario un paso más: el conocimiento de tal consolidación por el damnificado. Al conocimiento del carácter permanente de la incapacidad no llega el damnificado de la misma manera en todos los supuestos, pues mientras en algunos queda enterado en el acto mismo del infortunio (v. gr. en casos de amputaciones traumáticas), en otros a través de un alta médica con incapacidad subsistente irreversible, en otros llega a saberlo por el dictamen de la Comisión Médica administrativa a la que hubiere concurrido y así lo estableciere, o bien en otros casos con el agotamiento del plazo anual al cabo del cual la incapacidad temporaria pasa a considerarse permanente por imperio legal, en una suerte de consolidación jurídica (arts. 7, inc. 2, apdo. "c" y 9 inc. 2 de la ley 24.557).----------

----------En la especie el alta médica con incapacidad subsistente fue dada el día 19/7/13 también esta determinación del "a quo" ha ganado firmeza por falta de ataque-, de modo que desde entonces comenzó el curso del plazo de treinta días establecido en el art. 2 de la Res. 414/99 S.R.T. y al concluir el mismo el día 19/8/13 la demandada quedó automáticamente en mora, iniciándose allí el curso de los intereses.----------IV. Tales son los fundamentos por los considero que la sentencia atacada debe ser parcialmente revocada a fin de

reducir el monto del capital de la condena a la suma de $ 49.286,48, sin ajuste alguno por la variación del R.I.P.T.E., confirmándola en cambio en lo demás que fuera materia de agravio. ----------Desde que el actor fue derrotado en su único agravio computable y la demanda triunfa en que formulara, mas ello debido a un cambio en la doctrina del tribunal que ha sido impuesto por el flamante precedente de la Corte Suprema Nacional in re “Espósito c/ Provincia A.R.T. S.A.”, del 7/6/16, las costas de segunda instancia sean impuestas por su orden (art. 69 párr. 2° C.P.C.C.; confr.: S.C.B.A., L.L. 1979-C-215; C.N. Civ., Sala “C”, L.L. 1979-B-28).---------
----------En atención a la extensión, calidad y resultado de los trabajos profesionales de alzada, opino que los honorarios de los Dres. A. A. F. y J. M. F. C. deben ser regulados en las sumas equivalentes al 4 % y al 1,40 % del monto del proceso que surja de la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución (arts. 5, 6, 8, 13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4). No corresponderá en cambio fijar honorarios en beneficio del Dr. S. E. P. por sus trabajos en este grado vista la condena en costas por su orden y la vinculación de el nombrado con su cliente por el pacto de cuota litis de fs. 3, cuya validez jurídica fuera reconocida en autos mediante la
resolución judicial homologatoria de fs. 19 “in fine” (art. 4 ley cit.).----------
-
----Me expido aquí en consecuencia PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. ----------
-----**A LA PRIMERA CUESTIÓN** la Dra. Natalia Isabel Spoturno dijo: ----------
--- ----I. El Dr. Velázquez reseñó en lo esencial los detalles del caso, la decisión impugnada y los motivos de agravios por lo que me pronunciaré directamente sobre los aspectos traídos a decisión de esta alzada a fin de dar cumplimiento a la manda constitucional.----------
-
----II. La demandada cuestiona en su primer agravio que en la sentencia de grado se dispusiera la actualización por RIPTE sobre la fórmula del art. 14 de la LRT y no sobre los pisos y sumas fijas como establece la reglamentación aprobada por Decreto 472/14.
----Esta Sala —y esta Cámara puesto que la Sala B de este cuerpo seguía idéntico criterio— decidió invariablemente que el ajuste por RIPTE se aplicaba a las fórmulas de los artículos 14 y 15 de la LRT y no solamente, como dice el art. 17 del anexo de la reglamentación de la Ley 26.773 aprobada por Decreto 472/14, sobre los pisos y sumas fijas. A tal fin hemos declarado la inconstitucionalidad del art. 17 en cuestión tal como lo hiciera el juez de grado en la sentencia apelada. ----------
---------Sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el reciente caso “Espósito” (elDial.com-AA9756), fijó una postura contraria a la sostenida por este cuerpo. En este fallo y por unanimidad de los tres miembros que la integraban en ese momento, se dijo en el considerando 8°, que *“La simple lectura de los textos normativos reseñados en el considerando 5° de este pronunciamiento basta para advertir que del*

juego armónico de los arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de: (1) aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que los dejara "actualizados" a esta última fecha; y (2) ordenar, a partir de allí, un reajuste cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación del mismo índice. Y que del art. 17.5 también se desprende claramente que esos nuevos importes "actualizados" solo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación. En síntesis, la ley 26773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los "importes" a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente, a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal. El texto del art. 17.5, al establecer que "las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero" entrarían en vigencia a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para otra interpretación".----------

-----En cuanto al valor de los precedentes de la CSJN, es decir si resultan o no vinculantes para los tribunales inferiores, cabe destacar que ninguna norma escrita consagra la obligación formal de acatar la jurisprudencia de la Corte.----------

-----Los fallos dictados por la Corte Federal en ejercicio de la competencia extraordinaria (art. 14 de la ley 48) tienen su razón de ser en que el máximo tribunal del país resguarde la supremacía de la Constitución Nacional y del derecho federal por sobre el derecho local. De ahí que sólo procede si existe *cuestión federal* y si ha mediado *resolución contraria al derecho federal* invocado por el recurrente. En estos casos, cuando la Corte revoca la sentencia recurrida debe hacer *una declaratoria sobre el punto disputado,* debiendo devolver la causa al tribunal para que sea nuevamente juzgada, o bien *resolver sobre el fondo* (art. 16 de la ley 48). Esa declaración sobre la cuestión discutida sienta la doctrina de la Corte acerca de las cuestiones que hacen a su misión esencial como máximo guardián de la Constitución y del derecho federal, con la obvia intención del constituyente (y del legislador de 1862) de que sea seguida en todo el país. A partir de distintos fallos de la Corte se han esgrimido diferentes teorías para justificar el seguimiento -el *deber moral,* el *deber institucional-,* pero la tesis que en definitiva se acepta es la del *sometimiento condicionado,* que se desprende de los fallos "Balbuena" y "Cerámica San Lorenzo" de 1981 y 1985 respectivamente, y que se ha reiterado con posterioridad. De estos fallos se desprende que carecen de fundamento (o sea, son arbitrarias) las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen

modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, no siendo suficiente decir que “simple y respetuosamente” se discrepa con su doctrina. Es decir, en materia federal los tribunales deben seguir la doctrina que emana de la Corte, salvo que agreguen nuevos argumentos que no hayan sido evaluados por el máximo tribunal en su momento. Se ha agregado que además debe tratarse de doctrina consolidada, es decir, que no derive de un fallo aislado sino de varios y con votos con iguales fundamentos (conf. Ibarlucía, Emilio A., en Manili, Pablo Luis (Director): “Tratado de Derecho Procesal
Constitucional”, Ed. La Ley, 2010, T° III, págs. 517/519).----------

----Ahora bien, en este caso la Corte abrió el remedio federal por arbitrariedad de la sentencia recurrida. Esta cuestión, en palabras de Ibarlucía, no es tan simple por tratarse de “cuestiones federales no típicas” puesto que, como es bien sabido, no están expresamente previstas en el art. 14 de la ley 48. Así, existe una razón constitucional para entender que, en la medida que los pronunciamientos versen sobre cuestiones de derecho común, procesal o local, las provincias se han reservado la última palabra en materia de interpretación. Es lo que se denomina la *reserva de jurisdicción* que emana del art. 75, inc. 12 de la Const. Nacional, por el cual corresponde la aplicación de los códigos de fondo a los tribunales nacionales o provinciales, *según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones,* y en materia de derecho procesal y local deriva de tratarse de cuestiones no delegadas a la Nación (art. 121 de la Const. Nacional) (conf. Ibarlucía, op. cit., ídem, págs. 519/520).----------

----Continuando con el estudio de la cuestión, sostiene Ibarlucía que existen distintas causales de arbitrariedad y que, por ejemplo en los casos de *arbitrariedad fáctica (*prescindencia de prueba relevante, basarse en prueba inexistente, arbitrariedad o exceso ritual en la ponderación de la prueba o de los hechos, incurrir en autocontradicción, dejar sin efecto decisiones anteriores firmes, etc.) no podría decirse que la Corte sienta una doctrina *de derecho.* Pero no ocurre lo mismo cuando descalifica por arbitraria la interpretación del derecho aplicable hecha en una sentencia. Estos son los casos en que la Corte descalifica una sentencia por implicar una *interpretación equivocada, inadecuada, distorsionante, irrazonable* o *inequitativa* de la norma aplicable al caso. Son éstos, por ejemplo, los casos en que el máximo tribunal dice que la sentencia ha prescindido del texto legal que rige el caso sin dar razones para ello, que se funda en una afirmación dogmática de derecho o en la sola voluntad de los jueces. En definitiva dice que la aplicación e interpretación del derecho que ha hecho el tribunal emisor de la sentencia es contraria a la Constitución; es decir, que se ha violado el art. 18 de la Const. Nacional por no existir, en rigor, una sentencia. En estos casos, no existen mayores razones para que los tribunales del país no brinden a la doctrina que emana de esos fallos el mismo tratamiento que a los dictados en cuestiones federales

típicas; es decir, la obligatoriedad de su seguimiento si se trata de doctrina consolidada (conf. Ibarlucía, op. cit., ídem, págs. 520/521).----------En “Espósito” la Corte descalificó el fallo recurrido por arbitrariedad por apoyarse en *meras consideraciones dogmáticas e incurrir en un inequívoco apartamiento de las normas legales aplicables al caso*, con lo cual nos encontramos con el último de los ejemplos analizados, por lo que, en virtud de lo expuesto, corresponde aplicar el fallo indicado en el “sub exámine”. ---------- ----Por lo expuesto a partir de ahora y dejando a salvo mi criterio contrario, adecuaré mis pronunciamientos a la doctrina de la Corte.----------

----Como señala el apelante, y como lógica consecuencia de lo antes dicho, corresponde comparar el resultado que arroja la fórmula con el piso de la resolución vigente al momento del accidente. En la presente causa, la resolución vigente era la Nro. 34/13. De manera que, comparando el monto indemnizatorio que arroja la fórmula ($ 170.826,01) con el piso vigente al momento del accidente considerando el grado de incapacidad ($ 110.948,53) se llega a la conclusión que en la presente causa la fórmula es superior al piso debiendo, consecuentemente, la ART demandada abonar el importe que arroja la fórmula —con más el adicional previsto en el art. 3 de la Ley 26.773 conforme fuera dispuesto en la sentencia de grado— y la deducción de la suma

abonada extrajudicialmente ($ 155.704,73).----------

----------Por los motivos dados acompaño la propuesta del Dr. Velázquez de dejar sin efecto la aplicación del RIPTE a la presente causa y reducir el monto de condena a la suma de

$ 49.286,48.----------

----------III. La parte actora se agravia por el momento a partir del cual el juez de grado dispuso el cómputo de los intereses.----------

----------El art 2 de la Res. 414/99 SRT establece que “la mora en el cumplimiento de la obligación de otorgar las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley 24.557 se producirá de pleno derecho transcurridos treinta días corridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada o el capital depositado, y por el mero transcurso del plazo

indicado”.----------

----Es por ello que la mora se produce, conforme lo determina la resolución 414/99, transcurridos treinta días corridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada.-- ----El texto del art. 2 de la Ley 26.773 no modifica lo aquí resuelto puesto que no es lo mismo el nacimiento del derecho a la reparación (que ocurre el día del evento dañoso) y la exigibilidad de la obligación.----------

----------En este caso el actor obtuvo alta médica con incapacidad

el día 19/7/13 por lo que fue en ese momento en que comenzó a correr el plazo de 30 días otorgado por el art. 2 de la Resolución 414/99 a la ART para abonar la indemnización. De este modo incurrió la ART demandada en mora el día 19/8/2013 y es a partir de esa fecha que deben computarse los intereses por lo que la decisión tomada en la instancia anterior debe confirmarse.----------

----IV. Por los motivos dados acompaño la propuesta del Dr. Velázquez de revocar parcialmente la sentencia a fin de reducir el monto de condena a la suma de $ 49.286,48 dejando sin efecto el ajuste por RIPTE hasta la fecha del efectivo pago, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios. ----------

------- ----Las costas de alzada serán impuestas en el orden causado puesto que el resultado obtenido en esta instancia obedece a un cambio de doctrina motivado en el fallo

“Espósito” de la CSJN (arts. 69 párr. 2° y 72 CPCC).----------

---Los honorarios de alzada propuestos por el Dr. Velázquez resultan correctos y ajustados a las pautas arancelarias vigentes teniendo en cuenta para así decidir la extensión, mérito, calidad y resultado de las tareas cumplidas en esta instancia (arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18, 46 y concordantes de la Ley XIII N° 4). No corresponde regular honorarios al Dr. S. P. por el modo en que se ha resuelto imponer las costas y el pacto de cuota litis homologado a fs. 19 (art. 4 de la Ley de Aranceles).----------Por los fundamentos expuestos, a la primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------

----**A LA SEGUNDA CUESTIÓN** el Dr. Velázquez manifestó:----------

- ----Apelaron por bajos la letrada patrocinante del actor Dra. M. E. M. y su apoderado Dr. S. E. P. los honorarios que le fueran regulados.----------Asiste razón a estos recurrentes, pues en verdad la calidad , extensión y resultado de las tareas por ellos cumplidas justifican que los emolumentos le sean elevados a las sumas respectivas equivalentes al 14 % y al 4,90 %del monto total del proceso (arts. 5, 6, 8, 9, 18, 46 de la Ley XIII n° 4).----------

----Voto aquí entonces por la NEGATIVA. ----------

----**A LA SEGUNDA CUESTIÓN** la Dra. Spoturno expresó:----------

---En cuanto a los honorarios de los Dres. M. E. M. y el Dr. S. P., apelados por bajos, considero que la extensión, calidad, eficacia y resultado de los trabajos profesionales cumplidos en la primera instancia, así como la naturaleza del asunto, hacen que la regulación efectuada por el sentenciante de grado resulte baja por lo que considero atinado elevarlos a las respectivas sumas equivalentes al 14% y al 4,9% del monto total del proceso (Arts. 5, 6, 8, 9, 18 y 46 de la Ley XIII N° 4).----------
-

----Por los motivos dados, a la segunda cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.----------

---**A ESTA CUESTIÓN FINAL** el Dr. Velázquez respondió:----------

----Visto el acuerdo alcanzado al tratar la cuestión precedente, corresponde:----------

---A) Revocar parcialmente la sentencia apelada a fin de reducir el monto del capital de la condena a la suma de $ 49.286,48, sin ajuste alguno por la variación del R.I.P.T.E., confirmándola en cambio en lo demás que fuera materia de agravio.----------

----B) Elevar los honorarios de los Dres. M. E. M. y S. E. P., por sus labores de primera instancia, a las sumas respectivas equivalentes al 14 % y al
4,90 % del monto total del proceso. ----------

----C) Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado.----------

---D) Regular los honorarios de los Dres. A. A. F. y J. M. F. C., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4 % y al 1,40 % del monto del proceso que surja de la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución.----------

----------ASÍ LO VOTO. ----------

----------**A LA TERCERA CUESTIÓN** la Dra. Spoturno expresó:----------Tal como lo he adelantado, comparto la solución propuesta por el Dr. Velázquez, votando en consecuencia en idéntico sentido. ASÍ LO VOTO. ----------Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría y encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara, Dr. Marcelo J. López Mesa (Arts. 7º y 8º Ley
V Nº 17). ----------

----Trelew, de septiembre de 2016.----------

----En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente: ----------

----------**S E N T E N C I A**:----------

-

----REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada a fin de reducir el monto del capital de la condena a la suma de $ 49.286,48, sin ajuste alguno por la variación del R.I.P.T.E., confirmándola en cambio en lo demás que fuera materia de agravio.----------

----ELEVAR los honorarios de los Dres. M. E. M. y S. E. P., por sus labores de primera instancia, a las sumas respectivas equivalentes al 14 % y al 4,90 % del monto total del proceso.----------IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado.----------REGULAR los honorarios de los Dres. A. A. F. y J. M. F. C., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4 % y al 1,40 % del monto del proceso que surja de la liquidación a ser practicada en la etapa de

SCALZI
O

ejecución.----------

----Regístrese, notifíquese y devuélvase. ----------

-

CARLOS A. VELAZQUEZ
JUEZ DE CAMARA

NATALIA I. SPOTURNO
PRESIDENTE

----REGISTRADA BAJO EL N° _____ DE 2016 - SDL. - CONSTE.----------

JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO